



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Sentencia Definitiva

Expediente N° 72681/2017

AUTOS: GENERAL TOMAS GUIDO S.A.C.I.F. c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los, , reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar sentencia en estos autos, se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR JUAN A. FANTINI ALBARENQUE DIJO:

Llegan las presentes actuaciones ante esta Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por la empresa GENERAL TOMAS GUIDO SACIF contra la Resolución Administrativa de AFIP Número: Resolución 50/17 (DV TJSS) que hizo parcialmente lugar a la impugnación presentada por la actora contra el acta de inspección n° 142448430101 labrada bajo la orden de intervención n° 1424484 en concepto de “Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social por diferencias de remuneración” por los periodos 07/2012 a 06/2015 exclusivamente respecto al quantum de la determinación de deuda y ratifico la determinación de deuda efectuada mediante acta de inspección n° 142448430101 en concepto de “Aportes y contribuciones a la Seguridad Social por diferencias de remuneración por los periodos 01/2009 a 06/2012 y las actas de inspección n° 142448430101 en concepto de “Diferencias de contribuciones Seguridad Social – Dto. 814/2001, por los periodos 12/2009 a 06/2012 y 07/2012 a 06/2015, todas ellas labradas bajo orden de intervención n° 1424484. A su vez, se difirieron las sanciones determinadas mediante actas de infracción n° 1424484 confeccionadas en los términos del art. 5 de la Res Gral AFIP 1566 por periodos 01/2009 a 06/2012 y 07/2012 a 06/2015 y en los términos del art. 14 y 16 de la Res Gral AFIP n° 1566, por los periodos 12/2009 a 06/2012 y 07/2012 a 06/2015.

En su libelo recursivo la recurrente pide que se la exima del pago del depósito previo en atención a la delicada situación patrimonial atravesada por la empresa, como prueba de sus dichos adjunta flujo de fondos, certificaciones contables y extractos bancarios de los cuales surgiría la falta de disponibilidad de fondos para hacer frente a la determinación de deuda pretendida por la demanda, sin que tal hecho no implique dejar de pagar las cargas sociales o el desapoderamiento de la empresa. Por otro lado, menciona que de conformidad con las previsiones del art. 56 de la ley 24.522 (en adelante LCQ) los periodos pre concursales, a la fecha en que la AFIP libro la Orden de intervención, se encontraban prescriptos por el transcurso del plazo previsto en el mencionado artículo. Por ello, resalta que no solo existió imposibilidad de pago, sino que los montos reclamados por los periodos anteriores a la fecha de presentación del concurso se encuentran prescriptos. Manifiesta, en torno a horas extras no declaradas, que el proceso no se abrió a prueba y se fundó en dichos de demandas laborales en los exptes 49650/15 y 10478/15 de las que se

Fecha de firma: 15/02/2024

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#30042739#383935351#20240214130351202



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

desprende que hasta el 2010 los actores alegaron haber percibido horas extras sin ser debidamente registradas que a la fecha de inicio de la demanda laboral se encontraban prescriptas. también señala que en la causa 2371/2011 en función de la ampliación de denuncia formulada por el organismo recaudador en el año 2013, surge que todas las declaraciones efectuadas por los trabajadores en cuanto a la percepción de horas extras de forma irregular, lo fueron con anterioridad a julio 2012, periodos que por el juego armónico de los arts . 21 y 56 LCQ se encuentra prescriptos al no existir con anterioridad al 14/7/2012 acto interruptivo alguno.

Por las consideraciones efectuadas, la recurrente considera que la determinación de deuda por estos supuestos pagos irregulares debe ser revocada en lo que refiere al primer periodo 12/2009 a 06/2012 por encontrarse prescriptos. En cuanto al segundo periodo 7/2012 a 6/2015 alega que no existe prueba que acredite más allá del texto de las demandas laborales, las cuales no cuentan con sentencia. Por otro lado, en cuanto a la deuda generada por diferencia en el ingreso de contribuciones considera que la misma es inadmisibile en atención a que se contrapone con el espíritu y finalidad del propio decreto 814/2001, a su vez, cuestiona también la procedencia de la sanción impuesta. Cita jurisprudencia en apoyo de su postura.

El organismo por su parte en su escrito de réplica resalta la falta de cumplimiento del requisito previsto en el art. 15 de la Ley 18.820, art. 12 de la ley 21.864 y art. 26 inc. b) de la ley 24.463, en virtud de la cual el apelante debe depositar en garantía el importe de la deuda resultante de la resolución administrativa. Subsidiariamente contesta los agravios. En cuanto a los ataques efectuados contra las actas de relevamiento, sostiene que las mismas son meros “actos preparatorios” a diferencia del acto administrativo definitivo que sería el que -en principio- es susceptible de una declaración nulidad en los términos de la ley 19.549. Sostiene, en cuanto a los diversos cuestionamientos procedimentales alegados por la recurrente, que es evidente que el derecho de defensa no se observa violentado ni los pasos procedimentales obstaculizados, por lo que los planteos nulificantes devienen inoficiosos.

Respeto al planteo de prescripción planteada en los términos del art. 56 de la ley de concursos y quiebras, recuerda que es la firmeza de los saldos adeudados la ue habilita al organismo recaudador a perseguir el cobro de estas sumas, por lo que el agravio debe ser rechazado.

Respecto del acta de inspección N°0142448430101 en concepto de aportes y contribuciones a la Seguridad Social por diferencias de remuneración, remarca que la distinción que se pretende hacer entre la actual y la anterior gerenciadora es indistinta toda vez que la firma responsable de las consecuencias que se desprendan de las relaciones laborales es GENERAL TOMAS GUIDI S.A.C.I.F. indistintamente de quien sea su gerenciador. A continuación, relata las diversas observaciones realizadas por la empresa en sede administrativa y la respuesta a las mismas que dieron lugar parcialmente a estos

Fecha de firma: 15/02/2024

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#30042739#383935351#20240214130351202



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

planteos, resaltando que respecto de los periodos 01/2009 a 06/2012 se ratificó esta determinación de deuda en atención a que la impugnante se limitó en sus agravios a argumentar que los mismos se encuentra prescritos en los términos del art. 56 de la ley de Concursos y Quiebras.

Por otro lado, en cuanto al acta de inspección 1424484 en concepto de contribuciones seguridad social – Decreto 814/2001 por los periodos diciembre 2009 a junio 2012 y diciembre 2009 a junio 2012 y luego de un repaso normativo de la cuestión, señala que toda vez que el recurrente no efectuó impugnación alguna al respecto se procedió a ratificar el ajuste efectuado. Cita jurisprudencia en apoyo de su postura respecto a la procedencia de los cargos por este concepto. Para concluir, respecto a la sanción impuesta, luego de su descripción normativa, concluye que corresponde el rechazo de este agravio.

I.- Preliminarmente corresponde el análisis de los requisitos de admisibilidad a fin de poder ingresar en el fondo de la cuestión.

En cuanto a la falta de cumplimiento del requisito de depósito previo cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, admitió en reiteradas oportunidades la validez constitucional de la exigencia del pago previo de la deuda determinada por la autoridad administrativa, como requisito previo a la intervención judicial (cf. doctrina de Fallos 155:96; 162:263; 235:479; 238:418; 296:57; etc.). Sólo justificó apartarse de la imposición legal, en casos de montos excepcionales, en que el requisito en cuestión pudiera constituir un obstáculo insalvable para la revisión de la pena por los tribunales de justicia, fundándose en el derecho de defensa del art. 18 de la Constitución Nacional (sea porque ese pago generaría un importante desapoderamiento - Fallos, 247:181 ; 205:208 y su cita-, sea por la falta comprobada e inculpable de los medios para afrontarlo -Fallos, 256:38; 261:101-, sea porque se revele un inmediato e inequívoco propósito persecutorio o desviación de poder -Fallos 288:287; 308:381-).

Sin embargo, esta excepción sólo es aplicable cuando “las constancias de autos no permitan descartar, por caprichosa, la dificultad alegada para la satisfacción inmediata de la multa impuesta”, exigiendo que tal imposibilidad encuentre sustento en elementos objetivos de criterio agregados a los autos, estimando insuficientes a estos efectos las manifestaciones en abstracto del interesado (cf. C.S.J.N., Fallos, 225:201; 249:221; etc.).

Ahora bien, las razones invocadas por el recurrente referidas a que se encuentra en concurso preventivo no constituyen causal válida que justifique la pretendida exención del depósito previsto, más aun si tenemos en cuenta que la prueba pericial propuesta fue llevada a cabo y de la misma –según dictamen del Cdor Gatinoni – no se desprendería el estado de insolvencia denunciado ante la escasez de elementos a peritar a fin de lograr el análisis integral de estado patrimonial de la empresa.

Con lo cual, toda vez que resultan insuficientes tanto las manifestaciones vertidas por la administrada como la certificación profesional sobre imposibilidad de pago





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

acompañada en autos, tendientes a demostrar la situación de imposibilidad de pago inculpable del depósito previo exigido por la ley, lo cual sólo podría lograrse mediante balances documentados, informes contables, dictámenes actuariales integrales, etc. que conduzcan al convencimiento por parte del tribunal de que dicho impedimento es real y no ficticio, corresponde –por razones señaladas- desestimar el recurso de apelación interpuesto.

Finalmente, y de acuerdo al principio general contenido en el art. 68 del C.P.C.C.N. y el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Cooperativa Eléctrica Azul Ltda. c/Administración Federal de Ingresos Públicos- D.G.I.”, sentencia del 05/10/04 -en la que remite a los fundamentos vertidos por la minoría en los precedentes “Farmacia España” (Fallos 323:1557) y “Asociación de Trabajadores del Estado” (Fallos 323:2349)-, deben imponerse las costas al recurrente vencido.

Con respecto a la regulación de honorarios que imponen los artículos 163 y 164 del C.P.C.C.N., cabe tener presente que la Ley 27.423 no puede ser aplicada en autos en forma mecánica, dado que dicho texto legal no contempla expresamente el proceso de impugnación de deuda. Ello así, teniendo presente lo expresado por el Superior Tribunal de la Nación, en cuanto a que la regulación de honorarios, no debe depender exclusivamente del monto del reclamo, sino que deberá ser ponderado por los jueces, bajo pautas de razonabilidad, atendiendo a la naturaleza, complejidad del asunto, mérito de la causa, calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado (Fallos 257:142; 296:126; 302:534 y sus citas, 320:495; 339:216; entre otros) y lo dispuesto por el artículo 1255 del Código Civil y Comercial de la Nación y lo establecido por el Alto Tribunal en “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa” Sentencia del 4 de septiembre de 2018, se regulan los honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte actora en 2 UMA -equivalente a \$ 68.762- y los de la demandada en 4 UMA -equivalente a \$ 135.528- (conf. C.S.J.N. Acordada 1/2024 y Res. SGA n° 12/2024). Importes a los que se adicionara el IVA en caso de corresponder (cfr. Excma. C.S.J.N. “Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación”, sent. Del 16/06/93, Fallos 316:1523).

Por las razones expuestas es mi voto: 1°) Declarar formalmente inadmisibles el recurso de apelación interpuesto, 2°) Imponer las costas a la vencida (art. 68 C.P.C.C.N.), 3°) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en 2 UMA -equivalente a \$ 68.762- y los de la demandada en 4 UMA -equivalente a \$ 135.528- (conf. C.S.J.N. Acordada 1/2024 y Res. SGA n° 12/2024). Importes a los que se adicionara el IVA en caso de corresponder.

EL DOCTOR WALTER F. CARNOTA DIJO:

En nuestro derecho positivo la regla solve et repete ha sido considerada congruente con las garantías procesales que emanan del art. 18 de la C.N. y 8° del Pacto de San José

Fecha de firma: 15/02/2024

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#30042739#383935351#20240214130351202



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

de Costa Rica. No obstante, dicho imperativo legal fue morigerado por el Superior Tribunal de la Nación en aquellos casos en que existe una manifiesta desproporción entre la suma que el contribuyente debe ingresar y su concreta capacidad económica o estado patrimonial, así como también ante la falta comprobada e inculpable de los medios necesarios para hacer frente a dicho imposición (CSJN Fallos 247:181; 250:208; 215:225; 219:668; 256:101; 285:302; 287:101; 307:1753), pero ninguno de estos supuestos resulta configurado en autos.

Estas excepciones deben ser aplicadas cuidadosamente en atención a los principios de igualdad ante la ley y de justicia distributiva que enmarcan el análisis de la presente cuestión. Las salvedades al principio general que contempla el art. 15 de la ley 18.820, que explicita la Corte Suprema de Justicia de la Nación, revisten un carácter excepcional y es menester para demostrarlas la existencia de una prueba fehaciente (CFSS Sala III sent. del 11/03/2020 “Cravero Raúl y Cravero Carlos SH c/AFIP s/Impugnación de deuda”).

En el caso que nos ocupa el apelante se limitó a ofrecer se designe perito contador pero sin acompañar a la causa estudio contable o informe pericial que exprese de manera minuciosa y detallada la situación patrimonial y financiera demostrativa de la imposibilidad económica invocada que le impidió dar cumplimiento a la manda legal sin comprometer seriamente el normal desarrollo de sus actividades (conf. art. 377 CPCCN). Expresa únicamente que el profesional ofrecido, debería pronunciarse sobre si sus libros son llevados en legal forma, detalle de la facturación que obra en su poder desde 2016 a la actualidad, indicar si se encuentra en condiciones de afrontar el depósito pretendido, especificar cuáles serían las consecuencias financieras si efectúa tal depósito y si es factible, dado su desempeño económico, obtener un crédito por la suma reclamada (ver escrito de impugnación).

Tampoco se acompañó un seguro de caución que le hubiera permitido demostrar su intención de cumplir con la normativa vigente, más aun teniendo presente que el referido instrumento ha sido considerado sucedáneo válido del requisito impuesto por la norma al garantizar suficientemente el interés fiscal (CSJN sent. del 04/11/2008 “Orígenes AFJP S.A. c/AFIP-DGI” Fallos 331:2480).

Ahora bien, reiteradamente la jurisprudencia ha expresado que resulta improcedente el mero ofrecimiento de una pericial contable sin aportar ningún elemento probatorio conjuntamente con la apelación, de manera que permita determinar de manera indubitable la imposibilidad económica de efectuar el depósito previo que se alega (conf. crit. esta Sala sent. del 23/04/2021 “Megatom S.A. c/AFIP s/Impugnación de de Deuda”; ídem. Sent. del 23/04/2021 “Benaglia, Leonor Susana c/AFIP s/Impugnación de deuda”; en idéntico sentido Sala I sent. del 28/12/15 “Altos de Uspallata S.A. c/Fisco Nacional-AFIP s/Impugnación de deuda”; ídem. Sala I sent. Del 28/05/21 “Workjet S.A. c/AFIP s/Impugnación de deuda”).

En virtud de lo expresado, adhiero a la propuesta del Dr. Fantini.

Fecha de firma: 15/02/2024

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#30042739#383935351#20240214130351202



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:

Adhiero al voto del Dr. Carnota.

En mérito de lo que resulta del presente acuerdo y habiendo dictaminado el Sr. Fiscal General, el Tribunal **RESUELVE:** 1°) Declarar formalmente inadmisibile el recurso de apelación interpuesto, 2°) Imponer las costas a la vencida (art. 68 C.P.C.C.N.), 3°) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en 2 UMA -equivalente a \$ 68.762- y los de la demandada en 4 UMA -equivalente a \$ 135.528- (conf. C.S.J.N. Acordada 1/2024 y Res. SGA n° 12/2024). Importes a los que se adicionara el IVA en caso de corresponder.

Regístrese, protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

NORA CARMEN DORADO
Juez de Cámara

WALTER FABIAN CARNOTA
Juez de Cámara Subrogante

JUAN FANTINI ALBARENQUE
Juez de Cámara

ANTE MÍ: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI
Secretaria de Cámara

ALP.

